



¡Nissan no se cierra!

**Nacionalización sin indemnización
bajo control de los trabajadores ¡YA!**



**Frente a la ultraderecha,
movilización de la clase obrera**

¡No pasarán!



Levantamiento social en EEUU

¡La lucha de clases es el camino para derribar a Trump!

► VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Las imágenes de esta lucha de clases han convivido con las escenas escalofriantes de los muertos y contagiados en plena pandemia por el coronavirus. Se ha puesto en evidencia la precaria situación de la mayoría de la clase trabajadora y juventud y, en concreto, de la población negra, el 13,4% de la población de EEUU.

Según el Laboratorio de Investigación APM, en 40 estados los afroamericanos están muriendo a un ritmo casi tres veces superior al de los blancos. En los tres estados con mayor porcentaje de población negra —Mississippi, Luisiana y Georgia— el 70% de las muertes por Covid-19 son negros. En Chicago, el 73%; en Milwaukee, el 81% y el 77% en el condado de Columbia en Washington.

Es la consecuencia de la ausencia de una asistencia sanitaria pública, de la segregación racial y económica de la población afroamericana en barrios marginales y pobres, de la lógica de un capitalismo senil que condena a la mayoría a la pobreza y la miseria. Según los datos de Poverty in the USA de 2016, la pobreza extrema afecta al 26,2% de la población negra y un 23,4% a la comunidad latina.

Un aparato del Estado racista al servicio del capital y la élite blanca

La opresión racial está incrustada en el ADN de la policía, la judicatura y el Estado capitalista. Donald Trump es la máxima expresión de este supremacismo racial blanco capitalista y extremadamente reaccionario. Su *Make America Great Again* es una bandera que lleva inscrita el racismo y la xenofobia, y que no pa-

ra de agitar entre su base social: desde la construcción del muro en la frontera con México y su autorización a disparar a los migrantes mexicanos, a sus insultos contra los musulmanes o su defensa de los fascistas blancos que se manifestaron en defensa del Ku Klux Klan en 2017.

Pero no es nada nuevo en la Casa Blanca. Con Obama se dispararon los casos de jóvenes y trabajadores negros asesinados a manos de policía. El expresidente dotó de equipamiento militar a los departamentos de policía de todo el país, una de las causas del incremento de muertes por violencia policial.

El racismo es, sobre todo, una cuestión de clase. El único delito de todos los asesinados por la actuación policial fue ser negros y de clase obrera. La diferencia entre el trato a los manifestantes blancos pro Trump, que con fusiles en la mano reclamaban el fin del confinamiento, y la brutalidad policial contra quienes hoy toman las calles es abismal.

Si el policía que asfixió a Floyd ha sido acusado de asesinato y homicidio imprudente —y no solo retirado de su puesto, como se pretendía— ha sido gracias a la masiva movilización. Pero se trata solo de un gesto obligado por las circunstancias, y que intenta frenar la indignación creciente.

La lucha debe continuar, aumentar su extensión y también la claridad de sus objetivos: la depuración completa de la policía de elementos reaccionarios, que deben ser expulsados y castigados ejemplarmente. Los departamentos de policía deben ser puestos bajo el control de las comunidades vecinales y las organizaciones de la clase obrera, empezando por los sindicatos, los colectivos sociales y comuni-

tarios, como Black Lives Matter y muchos otros, que están en primera línea de la lucha por los derechos democráticos y contra el racismo.

Esta medida debe completarse con un programa por el aumento de los salarios a 15 dólares la hora; por la implantación inmediata de la sanidad y la educación pública, gratuita, universal y de calidad; la reforma integral de los barrios pobres dotándoles de viviendas dignas y los equipamientos sociales y culturales necesarios; de un transporte ecológico, gratuito y de calidad; y la aprobación de un subsidio de desempleo federal para todos los trabajadores y trabajadoras en paro de 2.000 dólares al mes hasta encontrar empleo.

Por un partido de los trabajadores y la juventud. ¡Ninguna confianza en el Partido Demócrata!

El aparato del Partido Demócrata ha vuelto a demostrar que es un pilar del sistema. El candidato presidencial Joe Biden agradeció al alcalde de Minneapolis que alejara a los policías involucrados y ha pedido ¡que se abra una investigación! Parece que la filmación de la muerte de Floyd no es suficiente. Biden trata de ocultar su responsabilidad en la opresión que sufren millones de negros pobres en Estados Unidos: bajo el Gobierno Clinton en 1994 fue autor de la conocida "Crime Bill" que defendía la segregación en el transporte escolar.

Tras la renuncia de Bernie Sanders, el debate sobre la necesidad de crear un partido de la clase trabajadora y la juventud está más vivo que nunca. Si algo demostró el movimiento de Bernie —que tuvo un apoyo masivo

entre la juventud y entre amplios sectores de la población negra y latina— es la inaplazable necesidad de los oprimidos y oprimidas por transformar su vida. Las condiciones de opresión y desigualdad que levantaron la ola pro Sanders se endurecerán en los próximos meses y años.

Que en plena pandemia miles y miles hayan salido a las calles demuestra la voluntad y la determinación de la juventud y muchos trabajadores blancos, de los trabajadores y jóvenes negros para que se haga justicia y acaben para siempre los asesinatos. Se trata de un movimiento unificado por encima de barreras raciales, y que se une por la pertenencia a una misma clase social: la clase obrera.

Todas las organizaciones de la izquierda combativa y de clase de EEUU deben mantener y engrandecer esta movilización, y dar pasos enérgicos para levantar un gran partido de la clase trabajadora y la juventud que rompa con el establishment demócrata, que rompa con la burguesía y sus políticas. Sanders ha renunciado lamentablemente a este objetivo y se ha plegado al aparato demócrata, como ha hecho Ocasio-Cortez. Pero encadenarse a Biden no es la opción por la que hoy pelean decenas de miles en las calles.

Un partido de los trabajadores que no adopte ideas ni métodos sectarios, que trabaje con audacia en los movimientos sociales y en los grandes sindicatos defendiendo una política socialista genuina, que explique con claridad la necesidad de nacionalizar la banca y los grandes monopolios estadounidenses y planificar democráticamente la economía para rescatar a la gente y no a la plutocracia.

Hay que hacer un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora y la juventud a participar en estas protestas, organizando nuevas manifestaciones coordinadas y masivas en las principales ciudades, y hay que dotarlas de este programa anticapitalista y revolucionario.

Solo acabando con este sistema podrido podremos poner punto y final a la opresión de raza, de género y de clase. Para dar respuesta a todas estas aspiraciones, la clase trabajadora y la juventud estadounidense, que está demostrando una fuerza extraordinaria, necesita de sus propias herramientas: la construcción de un partido obrero en Estados Unidos es una necesidad inaplazable para enfrenar esta batalla y culminarla con éxito.

¡Black Lives Matter!



¡Defender el empleo y los salarios rompiendo con las políticas procapitalistas!



Carlos Ramírez
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La evolución de la economía española en el primer trimestre de este año presenta un panorama desolador. A pesar de que el impacto del Covid-19 se ha producido a partir de la segunda mitad de marzo, todos los indicadores han sufrido un rápido y profundo deterioro.

La crisis económica no ha hecho más que empezar

El PIB ha caído un 5,2%, el mayor descalabro trimestral registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, inaugurada en 1970. En cuanto al Índice de Producción Industrial, que ya en febrero disminuyó un 1,6% en términos interanuales, ha retrocedido un 12,6% en marzo.

Respecto al empleo, solo en marzo y abril, se han registrado 600.000 nuevos parados, alcanzándose los 3,89 millones de desempleados en total, mientras los afiliados a la seguridad social han caído en casi un millón. Estas cifras no incluyen a los 3,1 millones de trabajadores de 530.000 empresas afectados por ERTE, ni al millón y medio de trabajadores y autónomos acogidos a otras prestaciones extraordinarias.

En un contexto en el que la pobreza crónica hace mucho que está incrustada en el tejido social del Estado español —antes del coronavirus 850.000 familias estaban al borde de la exclusión social y más de dos millones de niños (el 26,8% del total) vivían en riesgo de pobreza—, los efectos sociales de este nuevo golpe no se han hecho esperar y están siendo dramáticos. Las grandes colas de personas para recoger comida en los barrios obreros de numerosas ciudades son una prueba inapelable de ello.

Y todas las previsiones apuntan a un empeoramiento considerable. El PIB caerá en torno al 9,4% este año, la inversión industrial se hundirá más de un 35%, según el Ministerio de Industria, y el FMI alerta de que el paro llegará al 20,8% a finales de este ejercicio.

La experiencia de la Gran Recesión de 2008

El débil y atrasado tejido industrial español está siendo duramente golpeado, y por más que el Gobierno, la patronal y los dirigentes sindicales de CCOO y UGT insistan en que los ERTE van a evitar la destrucción de empleo, no será así: según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), alrededor del 30% de los afectados por ERTE no recuperará su puesto de trabajo.

En este contexto de depresión económica, el peso de la deuda pública —mucho mayor hoy que al inicio de la anterior Gran Recesión, periodo en el que el Estado español estuvo al borde de la bancarrota— y el déficit público, que ya se está desbocando, pueden convertirse en un lastre insostenible que hunda la economía española en una profunda y larga depresión.

Efectivamente, en 2008 la deuda pública ascendía al 39,7% del PIB, el déficit público se situaba en el 4,57% del PIB y el diferencial de la prima de riesgo del bono español frente al alemán era

La economía española en caída libre



de 40 puntos. Con la economía en franco retroceso y con la deuda española en el punto de mira de los especuladores, el Estado se vio obligado a pagar intereses cada vez más elevados para poder sufragarla. Estos altos intereses junto a las decenas de miles de millones que, primero el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero y más tarde el del PP, regalaron a empresarios y banqueros para garantizar sus ganancias provocaron un crecimiento descontrolado de déficit y deuda. La prima de riesgo alcanzó el récord de 612 puntos en el verano de 2012 y “el reino de España” estuvo a punto de declarar la suspensión de pagos.

El Banco Central Europeo intervino comprando deuda y prestó al Estado español decenas de miles de millones de euros para que el Gobierno rescatara a la gran banca. La contrapartida ya la conocemos: duros recortes sociales, devaluaciones salariales, reforma del mercado de trabajo incrementando la precariedad laboral, aumento de la edad de jubilación; contrarreformas y ataques a los derechos sociales que profundizó el Gobierno del PP.

La tormenta perfecta: recesión, deuda y déficit públicos disparados

El punto de partida en 2020 es considerablemente peor. Los desequilibrios son más agudos. La deuda pública ascendió en 2019 a un alarmante 95,5% del PIB (40 puntos porcentuales más que hace una década) y superará el 115% a finales de 2020, alcanzando el 124% en 2021. El déficit público, en el 2,8% del PIB, sufrirá un rapidísimo deterioro, que el propio Gobierno apunta a que superará el 10,3% este año.

La presión sobre la deuda española ya se ha incrementado de forma notoria, y aunque el BCE está comprando masivamente deuda los resultados son escasos. La dinámica destructiva iniciada en

2008 se ha puesto en marcha nuevamente, pero con mayores desequilibrios y con la perspectiva de una caída aún más profunda de la actividad económica.

Hoy, cuando el Covid-19 se encuentra lejos de haber sido erradicado y sus consecuencias sociales son dramáticas para millones de personas, son numerosas las voces de distintas instituciones financieras que ya advierten sobre que los desequilibrios de las cuentas públicas no pueden traducirse en un mayor gasto social. Es evidente que la oligarquía financiera, que domina la sociedad, y los distintos Gobiernos nacionales a su servicio están recrudeciendo la guerra contra la clase obrera y los sectores más oprimidos para que seamos nosotros quienes paguemos, una vez más, la factura de la crisis y decadencia de su sistema económico. Así fue en 2008, y así será ahora.

La agencia Freemarket es cristalina al respecto: “...dentro de un año aproximadamente, los Estados y la Comisión (Europea) condicionarán el suministro de soporte financiero a la implantación de un plan de consolidación fiscal y de reformas estructurales capaz de situar las finanzas públicas en la senda de la sostenibilidad y restaurar el crecimiento”. (eleconomista.es 9/5/2020).

No hay terceras vías: o con los capitalistas o con los trabajadores

La burguesía española es consciente de las grandes dificultades que tendría para

llevar a la práctica sus planes si la clase obrera se enfrentara a ellos con la lucha masiva. Por eso intentan desactivar esta posibilidad. Cuentan con un gran aliado en las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, dispuestas a seguir apuntalando la política de paz social y el consenso con la patronal a costa de lo que sea. Llegar a un gran acuerdo social suscrito por las principales fuerzas políticas y sindicales es uno de los objetivos de la clase dominante para imponer su programa con la menor respuesta en la calle posible.

Así se expresa la CEOE: “Las acciones que se necesitan son de gran calado y han de mantenerse en el tiempo, por lo que para dar credibilidad a este programa se requiere un amplio consenso político apoyado por los empresarios y los interlocutores sociales”.

Lamentablemente el Ejecutivo PSOE-UP es uno de los principales valedores de este pacto y de la política de colaboración de clase con los grandes empresarios y la banca. Si este Gobierno se sigue adentrando por esta senda, si no da un giro de 180 grados, se verá abocado a llevar a cabo profundos ataques, siguiendo el ejemplo de Alexis Tsipras en Grecia, e inevitablemente profundizará el divorcio con su base social; esta como ya hemos visto en multitud de ocasiones superará todos los obstáculos y retomará el camino de la lucha y la organización: la única forma eficaz de impedir que seamos las y los trabajadores los que paguemos la crisis capitalista.

► www.izquierdarevolucionaria.net

El derrumbe económico mundial y la lucha por el socialismo





¡Derogar íntegramente la reforma laboral es vital para los trabajadores!

Gobernar para la CEOE y el Ibex 35 o para las familias obreras y la juventud



Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El pasado 20 de mayo, el PSOE, Unidas Podemos (UP) y EH Bildu firmaron un acuerdo en cuyo punto primero planteaban la derogación íntegra de la reforma laboral y que fuera efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas debido al Covid-19.

Cuatro horas más tarde, el PSOE anuló ese punto clave. Daba marcha atrás retomando el texto del programa de Gobierno firmado con UP en diciembre de 2019. Una redacción mucho más abierta a distintas interpretaciones y donde no se tocan los aspectos más lesivos de la contrarreforma, como son todas las medidas que se introdujeron para abaratar y facilitar el despido, y sin ningún plazo para llevarlo a cabo.

Es más, esta nueva versión es un retroceso respecto a dicho pacto de Gobierno ya que elimina las referencias a la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y a la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Más allá de las declaraciones iniciales de Pablo Iglesias —*Pacta sunt servanda*, los pactos están para ser cumplidos—, Unidas Podemos (al igual que Bildu) lo ha aceptado y asegura que “no había contradicción” entre el comunicado del PSOE y lo pactado entre las tres fuerzas.

Los hechos son incontestables. La burguesía ha dicho no a la derogación de la reforma laboral y PSOE, UP y Bildu han retrocedido rápida y lamentablemente sin ofrecer la menor resistencia.

¿Quién manda en el Gobierno?

La reforma laboral es una cuestión estratégica para los capitalistas. Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, forzó la supresión inmediata del punto uno y demostró quién manda realmente en el Gobierno. Calviño declaró: “Nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia. Con esta realidad, sería absurdo y contraproducente abrir un debate sobre esta materia”.

Nadie, ni del PSOE ni de UP, ha contestado a la ministra. Pablo Iglesias ha mantenido un clamoroso silencio. El golpe de autoridad dado por la vicepresidenta tercera ha sido inapelable y su afinidad con la patronal no deja lugar a dudas.

La burguesía, que desde el primer momento ha sometido al Ejecutivo a una estrecha vigilancia y a una presión implacable, reaccionó ante el acuerdo con contundencia en todos los frentes.

CEOE y Cepyme expresaron inmediatamente su “rotundo” rechazo, y pusieron en marcha el mecanismo del chantaje suspendiendo su presencia en las mesas de diálogo social. También el PNV, el partido de la patronal vasca, mostró su firme oposición y su presidente, Andoni Ortuzar, advirtió que “el depósito de

confianza del PNV [en Sánchez] tiene la luz de reserva encendida”.

Los medios de comunicación han salido en tromba cargando con bala contra el Gobierno. El grupo Prisa ha movilizado todos sus recursos, *El País* ha llamado a que se “depurasen responsabilidades” o Àngels Barceló, de la *Cadena Ser*, condenaba el pacto con Bildu al más puro estilo de editorialista de *La Razón*.

Los capitalistas marcan con mano de hierro el rumbo del Gobierno y han querido mandar un mensaje claro: cuestionar la reforma laboral es para ellos totalmente inadmisible y no van a permitir que se adopte ninguna medida sin su consentimiento, y mucho menos si amenaza sus intereses.

El Gobierno retrocede, CEOE y UGT colaboran y Unidas Podemos agacha la cabeza

Las negociaciones que dieron como resultado la firma del pacto estuvieron mediatizadas por el debate parlamentario sobre la nueva prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno y la necesidad de recabar apoyos. Pero no fue el único elemento que explica que se planteara suscribir este acuerdo justo en este momento. De hecho, al final el sentido de los votos de Bildu resultó intrascendente.

Con la derecha a la ofensiva intentando movilizar a su base social, y con el Gobierno intentando cimentar su mayoría parlamentaria apoyándose cada vez más claramente en el PNV y Ciudadanos (el

propio Pablo Iglesias agradeció a Ciudadanos que haya girado hacia “una derecha civilizada”), el Ejecutivo intentó reforzar su flanco izquierdo con lo que sin duda consideró una maniobra audaz. El resultado de este movimiento ha sido un acuerdo inaceptable para los capitalistas.

El retroceso del Gobierno es total. Pedro Sánchez y gran parte de sus ministros no pierden ocasión para alabar a los empresarios españoles y resaltar su “compromiso con el país” y su “patriotismo”.

La posición de los dirigentes de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, ha sido absolutamente lamentable. Comprometidos con la política de colaboración con los empresarios, se han unido al coro de reproches a los firmantes del acuerdo y acusan al Ejecutivo de poner en peligro el llamado diálogo social. Y lo hacen justo cuando más claramente ha quedado en evidencia que este no es más que una farsa.

¿Por qué la CEOE interrumpe el diálogo social cuando se plantea la derogación íntegra de la reforma laboral y no lo hace cuando se habla de anular sus aspectos más lesivos?

Los capitalistas participan en las mesas de diálogo social para que se aprueben medidas contra los trabajadores y que sean refrendadas por los sindicatos y las organizaciones de izquierda que participan. La concertación social es un fraude.

Pero este engaño no sería viable sin la participación y el compromiso de los sindicatos, el Gobierno y UP. Ninguno de ellos tiene intención de hacer nada para someter a la patronal; el diálogo social no es más que un señuelo.

Con la lucha y armados con un programa anticapitalista derrotaremos la ofensiva patronal

Los capitalistas españoles pretenden competir en la dura pugna entre las distintas burguesías nacionales por el mercado mundial de la única manera que la parásita y atrasada clase dominante española sabe: devaluando todavía más la fuerza de trabajo.

La CEOE no solo no acepta la derogación de la reforma laboral de 2012 sino que exige que esta se profundice y amenaza: “La palabra ERTE se puede convertir en ERE”.

Unidas Podemos debe de dar un giro de 180 grados en su política. El final del camino que está siguiendo es de todos conocido. En Grecia, Syriza aceptó la lógica capitalista, quedó atrapada por ella y acabó justificando y llevando a cabo duros y profundos recortes sociales que incrementaron el sufrimiento de la clase obrera, que vio frustradas las esperanzas que esta había depositado en Tsipras. Esta política abrió el camino para la vuelta de la derecha al Gobierno griego.

La movilización contundente y masiva defendiendo un programa que rompa con el capitalismo es la clave para derrotar la ofensiva patronal; además hay que construir una izquierda combativa que armada con el programa del marxismo no ceda ante las presiones intolerables de los grandes capitalistas y que luche decididamente por la transformación de la sociedad.



Afiliate a **IZQUIERDA REVOLUCIONARIA** y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 625 707 798 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZIA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIA: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • [f](https://www.facebook.com/izquierdarevolucionaria) [i](https://www.instagram.com/izquierdarevolucionaria) [t](https://www.tiktok.com/@izquierdarevolucionaria) @IzquierdaRevol

El Ingreso Mínimo Vital y la pobreza creciente

Por una política de clase y anticapitalista



Bárbara Areal
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El 29 de mayo el Consejo de Ministros del Gobierno PSOE-UP dio luz verde al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La medida ha sido bienvenida por el 84% de la población, según el CIS. Y es que la situación es desesperada. Con un colapso económico y social similar al que provoca una guerra, la vida de millones de familias está al borde del precipicio.

La postura escandalosa de la derecha

La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, tildó el IMV de “regalo” para crear “dependencia del Estado”. El portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, lo denunció como una “medida comunista”, y Macarena Olona acusó a Pablo Iglesias de querer imponer con él su “régimen totalitario”. El ya exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, afirmó que era “un sueldo Nescafé para toda la vida...”.

Ante la evidencia de que con ese discurso solo profundizaban su aislamiento, se fueron moderando. Los primeros fueron el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, consumados representantes del gran capital. Incluso la Fundación FAES se declaró partidaria de alguna ayuda, y Jorge Buxadé, de Vox, que calificó el IMV de “auténtica broma” en abril, dice ahora que su partido “no está en contra”.

¿Pero qué les lleva a matizar sus opiniones? La mayoría de la burguesía española no ha olvidado el 15M, las mareas, las marchas de la dignidad, el nacimiento de Podemos... Díaz Ayuso explicaba que si Madrid llegaba al millón de perso-

nos tendríamos “disturbios, un problema de orden público y por supuesto social”. Temen una explosión.

El debate sobre el IMV. ¿Acabará realmente con la pobreza?

El Gobierno tiene razón en señalar que es la primera vez que un subsidio de este tipo ha sido aprobado, y que nada de esto sucedió en 2008. Pero muchas de sus declaraciones están teñidas de afirmaciones exageradas.

El IMV es un instrumento completamente insuficiente para llegar a fin de mes en condiciones dignas. Es un paliativo, pero no acabará con la pobreza.

Según el decreto, este ingreso será de 462 euros al mes para una persona que viva sola, que se incrementará en 139 por cada persona adicional, hasta un máximo de 1.015 euros y con un complemento de 100 euros para familias monoparentales. La prestación será la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona o unidad de convivencia y la renta del IMV. Por ejemplo, un hogar con cuatro miembros tiene derecho a un IMV de 877 euros. Si tiene otros ingresos mensuales, de 300 euros por ejemplo, el ingreso será de 577. Llegar a fin de mes seguirá siendo harto difícil.

Para solicitarlo hay que tener entre 23 y 65 años —o 18 años si hay menores a cargo—, cumplir un año de residencia legal en España, haber vivido independientemente al menos un año en el caso de familias y tres años en el caso de personas solas, y tener ingresos el año anterior inferiores a la renta garantizada anual: de 5.500 euros para una persona y hasta 12.000 como máximo en el caso de una pareja con tres hijos/as.

Según el Gobierno, beneficiará al 5% de la población —2,3 millones de perso-

nas— y su coste rondará los 3.000 millones de euros al año.

Las primeras voces críticas ya se han alzado. Daniel Raventós, experto que comparecerá en la Comisión para la Reconstrucción Económica del Congreso, considera que el IMV puede dejar fuera al 75% de la población que vive bajo el umbral de pobreza, y declara que será “no insuficiente, sino extremadamente insuficiente”. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cuestiona que el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios se realice sobre datos de renta de un año antes, lo que hace que la prestación “no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia”.

Efectivamente, en el Estado español hay 2,5 millones de habitantes en pobreza severa y otros 12 millones en riesgo de pobreza. Este subsidio llegará a las víctimas agudas que ya existían, pero los millones que han colapsado económicamente en los últimos meses no cuadran con la propuesta del Gobierno. Sin olvidar que estos 3.000 millones palidecen ante los 100.000 movilizados para garantizar los beneficios de la banca y las grandes empresas.

Esconder la abundancia de la casta con caridad social no es una alternativa para los trabajadores

Marx explicó que para medir el bienestar de la clase obrera ni el salario nominal —el dinero de la nómina—, ni el salario real —las mercancías que se puede comprar con él— agotaban el asunto. “El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional (...) La

parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa”*. Por más que les pese a algunos, el marxismo supera la prueba de la práctica.

Respecto al salario nominal, desde la crisis de 2008 los salarios no crecieron, porque un incremento del 0,08% en diez años es realmente un retroceso salvaje si descontamos el aumento de la inflación. En lo que afecta al salario real, los trabajadores hemos perdido un 20% de poder adquisitivo desde 2008. Este es el auténtico resultado de la *paz social* practicada por las cúpulas de UGT y CCOO. Pero hay más.

El saqueo a la clase obrera ha sido de tal magnitud que ha modificado la distribución de la Renta Nacional: “A finales de 2007, la remuneración de los asalariados representaba el 49% del PIB y ahora tan solo del 47% (...) los dos puntos que se ha reducido la aportación de la masa salarial han ido a parar a las rentas empresariales”.

También hay un retroceso histórico en derechos sociales que, aunque no forman parte de la nómina salarial individual, beneficiaban al conjunto de la clase rebajando las facturas a pagar. El caso de la vivienda, la educación y la sanidad son paradigmáticos.

Por una política de clase para combatir la pobreza y la catástrofe capitalista

El empresario bueno existirá en otra dimensión, pero no en la nuestra. Es más, hay un riesgo de rebaja generalizada de los salarios. Si el número de parados crece vertiginosamente y, si como han insinuado algunos ministros, 460 euros al mes es una cantidad digna para llegar a fin de mes, la patronal recurrirá a estos argumentos y a muchos otros en su batalla por deprimir aún más los salarios.

El escudo social no se puede reducir a la caridad social. Debe pasar por defender a todas las familias trabajadoras con una medida, entre otras, que evitaría la pobreza y exclusión: un subsidio indefinido para todos los desempleados, hasta encontrar un puesto de trabajo, de 1.200 euros al mes (equivalente al SMI que debería incrementarse a esta cantidad).

Algunos dirán que los marxistas despreciamos la lucha por las reformas. Falso. Como decía Rosa Luxemburgo, las auténticas reformas que hacen avanzar nuestras condiciones de vida y conquistan derechos laborales, sociales y políticos solo se obtienen mediante la lucha de clases. Cualquier reforma siempre estará amenazada por la burguesía, e intentará eliminarla de un plumazo. Por eso las reformas son una parte del proceso de la revolución socialista, y deben servir para incrementar el nivel de conciencia, organización y combate de los trabajadores contra el sistema, no para adormecerlo y propagar la idea de que las instituciones capitalistas, sus leyes y su Estado son la única opción para mejorar la vida de la gente.

Necesitamos tomar la dirección de la sociedad, expropiar los medios de producción y planificar la abundante riqueza que creamos para ponerla al servicio de la mayoría. Necesitamos socialismo, el capitalismo ya ha demostrado que es un callejón sin salida.

* K. Marx, *Salario, precio y ganancia. Trabajo asalariado y capital*. Fundación Federico Engels. Madrid, 2003, pp. 95-96.



¡Ayuso dimisión!

El PP y Vox alientan las protestas para volver a llenar los bolsillos de la patronal



Víctor Taibo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Por mucho que Ayuso, presidenta de la Comunidad, y Almeida, alcalde de la capital, intenten ocultarlo, Madrid se ha convertido en la zona cero de la pandemia y encabeza la cifra de fallecidos: casi 16.000, cerca de 6.000 de ellos en residencias de ancianos y personas dependientes.

Esta tragedia es fruto de un modelo político y económico que ha hecho de Madrid un paraíso del pelotazo inmobiliario, la explotación y la corrupción. La patronal lleva muchos años llenándose los bolsillos a costa del erario pú-

blico y el hundimiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Ahora presionan duramente para que la situación vuelva a la “normalidad”.

Esta crisis ha puesto en evidencia que la salud y la supervivencia es una cuestión de clase, de ricos y pobres. El impacto del Covid-19 en las zonas ricas ha sido mucho menor, tanto en contagios como en mortalidad. Mientras en barrios obreros como Usera o Villaverde la movilidad ha sido superior al 20%, ya que muchos trabajadores han tenido que acudir a sus empleos en supermercados, industrias, transporte o en la sanidad, en zonas como el barrio de Salamanca la movilidad se ha reducido al 11%.

La Comunidad de Madrid, fruto de los recortes y la privatización del sistema sanitario público, ni estaba preparada para afrontar la pandemia, ni lo está para la desescalada: 1.172 camas hospitalarias menos entre 2008 y 2018 en los 5 principales hospitales de la CAM; 2.264 trabajadores sanitarios menos; y 773.878 personas en listas de espera, el 28% de las cuales tienen que esperar más de 90 días.

Los centros de atención primaria tuvieron cerrarse durante la pandemia para poder montar el hospital de Ifema, y a día de hoy por lo menos el 70% sigue sin funcionar. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria siguen cerrados desde el 22 de marzo, sin que haya urgencias de noche, fines de semana y festivos. ¿Cómo se puede decir que la CAM está preparada con estos datos?

La política de desescalada debe atender únicamente a criterios sanitarios, cosa que no está

ocurriendo, y deben rechazarse las más que evidentes presiones patronales para abrir ya la economía a cualquier coste.



Banderas de España en la ‘milla de oro’ y colas del hambre en los barrios obreros



José Antonio López
Izquierda Revolucionaria
Madrid

A las y los trabajadores que estamos siendo golpeados por la pandemia, que estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo y viendo como nuestras condiciones de vida se hundan, las “protestas” en la llamada “milla de oro” de Madrid nos provocan una gran repugnancia.

Las caceroladas del barrio de Salamanca están coincidiendo con las inmensas colas para poder recoger comida en barrios obreros como Aluche, Carabanchel, Vallecas... donde vivimos la ma-

yoría. Madrid está sufriendo la mayor epidemia de hambre que posiblemente haya experimentado la ciudad desde la postguerra.

La desigualdad entre distritos es lacerante. En el barrio más pobre, San Cristóbal (Villaverde), las familias van tirando con ingresos medios anuales de 19.000 euros por hogar. Por el contrario, en El Palantino (distrito de Moncloa-Aravaca) las familias ingresan unos 89.000 euros al año.

La mayoría de las familias obreras viven al día y cualquier gasto imprevisto o reducción de sus ya limitados ingresos les supone caer en la miseria. Unos 420.000

trabajadores afectados por ERTE en la Comunidad de Madrid han visto reducirse sus ya bajos salarios un 25%. Además, hay más de 100.000 personas en la capital recibiendo ayuda alimentaria de la administración o de ONG, parroquias o asociaciones vecinales.

Solo el Banco de Alimentos ha recibido un 30% más de solicitudes durante el confinamiento. La desesperación de la gente se ha visualizado en las largas “colas del hambre”, como las del distrito de Latina, que se repiten diariamente en zonas como Carabanchel, Orcasitas o Vallecas. En estas colas se espera entre dos y siete horas para recibir ali-

mentos básicos como arroz, aceite, huevos, harina y patatas.

En este panorama desolador, hay que destacar el papel jugado por las asociaciones vecinales que retomando las tradiciones del movimiento vecinal, y de forma completamente desinteresada, han levantado en unas pocas semanas una enorme red de apoyo mutuo entre los trabajadores.

Según la FRAVM, se han creado 58 redes con más de 6.000 voluntarios que ya han suministrado alimentos a más de 20.200 personas. Se han organizado 37 despensas, para poder llenarlas estas asociaciones están recibiendo una enorme cantidad de donaciones de los vecinos. La Asociación de Vecinos de Aluche está recaudando fondos que les está permitiendo gastar unos 7.000 euros a la semana en alimentos.



Precariedad laboral, despidos y contagios masivos entre el personal sanitario

Enfermera del Hospital
Gregorio Marañón de
Madrid

Desde que comenzó la crisis sanitaria de la Covid-19, los contagios confirmados entre el personal sanitario han ascendido a más de 50.000, un 20% del total de positivos registrados en el Estado español, el país con más contagiados entre sanitarios. Además, han fallecido 55 facultativos.

Esto ha supuesto un aumento de la demanda de enfermeras y auxiliares de enfermería, un sector muy precarizado. Muchas de las contrataciones en enfermería funcionan mediante una bolsa pública. No importa qué tipo de contrato te ofrezcan, ni si se trata de un mes o un día, estamos prácticamente obligadas a aceptar, de lo contrario nos penalizan durante un año sin recibir más ofertas.

Hay que denunciar el deficiente funcionamiento de la bolsa: hay compañeras que no han recibido ninguna llamada estando desempleadas, y otras que estaban trabajando y han sido contratadas en dos sitios al mismo tiempo.

La mayoría de los contratos para hospitales han sido de un mes, sin especificar servicio, salario, ni horario. Muchas veces el puesto era para enfermera “de disponible”: ir cada día donde seas necesaria sin importar tu experiencia o especialidad. Llevamos denunciando esta situación años porque —aparte de ser un peligro para los pacientes— es una carga de trabajo no solo para la enfermera que se incorpora sino para sus compañeras, que tienen que invertir mucho tiempo de su jornada a enseñar las especificidades del servicio.

También se ha contratado a alumnas de 4º de enfermería a jornada completa como “ayudantes” por 900 euros al

mes. Al no estar colegiadas estuvieron ejerciendo sin respaldo legal, y aunque la propuesta era que estuvieran siempre bajo supervisión ha sido imposible dada la carga de trabajo en los hospitales.

Otras hemos sido contratadas bajo el llamado “contrato Covid”, que consistía en firmar un precontrato. Tras semanas trabajando sin contrato, al ir a firmarlo te encontrabas con que duraba menos tiempo o con cláusulas que permitían despedirnos en cualquier momento. Hay enfermeras que han trabajado semanas sin estar siquiera dadas de alta en la Seguridad Social o tras una baja por contagio sin haber recibido el alta.

Después de aguantar esto, Díaz Ayuso anunciaba que no renovará el contrato a los más de 3.500 sanitarios que han luchado contra la pandemia en los centros públicos de Madrid. Aunque posteriormente se desdijo, la realidad es que a día de hoy no se han concretado las contrataciones.



La unidad nacional y la colaboración de clases solo favorecen a la reacción

Frente a la ofensiva de la ultraderecha, movilización de la clase obrera y la juventud **¡No pasarán!**



**Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva**

El sábado 23 de mayo el elitista barrio de Salamanca se abarrotó de 6.000 coches de alta gama tuneados con banderas de España y variada simbología fascista. Mostraban a la base social de la ultraderecha en plena acción, gritando su desprecio por la vida de los trabajadores, clamando por la libertad mientras daban vivas a Franco y escupiendo todo su odio de clase contra el Gobierno de coalición.

Lo ocurrido no es más que una operación planificada al milímetro por Abascal y Casado. Su gran apuesta era llenar las calles, pero la movilización estatal, con algunas decenas de miles en el mejor de los casos, queda muy lejos de sus aspiraciones. ¿Quiere esto decir que debemos adoptar una actitud pasiva, mirar para otro lado, y esperar a que esta ofensiva se desinflen por sí sola, como plantean voces y organizaciones de la izquierda parlamentaria? Rotundamente no. La ofensiva de la ultraderecha no se parará, salvo que la movilización contundente de la clase trabajadora y la juventud la frene.

El patriotismo, la Constitución y la “derecha razonable” no sirven para combatir a la reacción

La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa las consecuencias de décadas de recortes, privatizaciones y contrarreformas. Ha sido esa misma derecha que hoy clama por la libertad con palos de golf, chóferes y banderas de España, la máxima responsable de que Madrid se haya convertido en la zona cero de la pandemia y las colas del hambre. La “rebelión cayetana” de Núñez de Balboa pretende ocultar el papel del PP, Vox y también Ciudadanos en la catástrofe. Su ira se desata ahora porque sus fuentes de lucro no pueden funcionar a pleno rendimiento.

Cuando la ofensiva ha escalado hasta este punto, el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos no ha dejado de apelar a la “unidad nacional”, una posición que solo debilita la lucha contra la reacción, dando confianza a la extrema derecha y desarmando ideológicamente a la clase trabajadora. No se basa en la lucha de clases sino en la conciliación entre ellas, en sostener el régimen del 78 y sus instituciones capitalistas. Es urgente rectificar, y muy especialmente que UP rompa con esta dinámica de concesiones y responda a las aspiraciones de su base social.

El llamamiento permanente a responder “todos juntos”, a batallar unidos en “esta guerra”, en definitiva, a exaltar la unidad entre clases y partidos, sean de izquierda o derecha, es un completo error. ¿Cómo vamos a combatir a quienes quieren aplastar nuestros derechos llegando a pactos con ellos? El argumento de que hay una “derecha razonable” para justificar acuerdos con Ciudadanos va por el mismo camino: el del desastre.

En los últimos años las instituciones burguesas del 78, la monarquía, el parlamento, sus leyes y Constitución han sido utilizadas en nuestra contra para destruir derechos sociales y democráticos y conquistados. Pero desde el Gobierno, y desde UP, se nos plantea ahora que esas son las mejores armas para combatir a la reacción.

No, ni con la Constitución, ni con la policía, ni con la justicia burguesa, ni con el aparato del Estado plagado de franquistas y al servicio de la élite capitalista vamos a frenar la ofensiva contra nuestros derechos. Alabando a empresarios como Amancio Ortega o celebrando la responsabilidad y patriotismo de la CEOE, mientras se cede a todas sus demandas, lo único que se hace es contribuir a que se envalentonen más. Esta estrategia de los dirigentes del PSOE, UP y de CCOO y UGT no sirve, y de mantenerse asfaltar el camino para que la

reacción se haga más fuerte y pueda recuperar el Gobierno. La colaboración de clases es un verdadero cáncer para la izquierda que solo beneficia a los que nos explotan y aplastan.

**Parar a la reacción con la movilización contundente.
¡Ningún pacto con la derecha y la patronal!**

Lo que necesitamos para combatir a Vox, al PP y a la patronal es una alternativa política de clase, genuinamente socialista, que rompa con la lógica podrida de este sistema y se apoye en la inmensa fuerza de los trabajadores y la juventud.

Queremos un escudo social, pero de verdad: que nacionalice la sanidad privada y las farmacéuticas, que contrate a decenas de miles de trabajadores sanitarios para defender la salud de todos; que ponga la riqueza que genera la clase obrera, y que hace funcionar la sociedad, al servicio de las necesidades de la gente, y eso pasa por nacionalizar también la banca y los grandes monopolios bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.

¿Qué respuesta encontrarían los dirigentes de Unidas Podemos y de los grandes sindicatos si hicieran un llamamiento a la clase trabajadora y a la juventud con esta política? ¿Si propusieran la conformación de comités antifascistas y acciones de masas para defender nuestros barrios y nuestros derechos democráticos? ¿Qué respuesta encontrarían si denunciaran que estos “españoles de bien” que han destrozado la sanidad pública, que nos despiden, que se lucran a nuestra costa y se niegan a derogar la reforma laboral para poder seguir haciéndolo? ¿Qué pasaría si dijeran que no van a acordar nada con estos parásitos sociales, y organizaran movilizaciones para exigir la derogación de todos los recortes y contrarreformas?

Encontrarían un apoyo y una respuesta enorme y extraordinaria. Demostrarían la fuerza poderosa de nuestra clase. Pondrían a la patronal contra la espada y la pared. Lograríamos victorias que nos llenarían de confianza, elevarían nuestra moral y harían retroceder a nuestros enemigos. ¡Pero eso es una política de clase, auténticamente socialista, anticapitalista!, dirán algunos desde sus nuevos cargos en la administración. Sí, no lo ocultamos. Pero es la política que se necesita en estos momentos, la única que ofrece una alternativa frente a la catástrofe que nos amenaza.

El capitalismo no se puede reformar. Incluso las conquistas que logremos mediante la movilización más dura tratarán de arrebatarlas a la mínima oportunidad: por eso hay que luchar por derrocarlo por completo. Sus instituciones y sus constituciones no nos valen en esta batalla.

Frente a la devastación social que provoca este sistema y sus defensores, necesitamos una alternativa socialista que rompa con toda la miseria a la que nos aboca esta crisis. ¡Con ese arma sí se vence al fascismo! Esa es la estrategia que necesitamos, la de un frente único de toda la izquierda política y sindical, con un programa socialista y anticapitalista de verdad, que rompa con la colaboración de clases. Esa es la tarea que debemos impulsar desde abajo —desbordando a unos aparatos que insisten en dar la espalda a la experiencia pasada y al futuro— si queremos cerrar el paso a la derecha y su ofensiva. Esa es la alternativa que defendemos desde Izquierda Revolucionaria. ¡Esa es la alternativa que necesita nuestra clase!

Únete a

**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Muere el torturador franquista 'Billy el Niño', con todas sus medallas policiales intactas y sin justicia para las víctimas



Pablo Alcántara
Izquierda Revolucionaria
Madrid

El 7 de mayo el coronavirus acababa con la vida de unos de los más destacados represores y torturadores de la policía política del franquismo, la Brigada Político-Social. Antonio González Pacheco, alias *Billy el Niño*, fallecía con todos sus honores y condecoraciones, con los pluses de pensión por sus medallas —que recibió tanto durante la dictadura como en la Transición, y que los Gobiernos del PSOE y del PP conservaron—, con sus suculentos negocios intactos y sin haber rendido cuentas ante la justicia por sus crímenes. Está claro que el régimen del 78 y el sistema capitalista no dejan tirados a sus lacayos.

Un historial de represión y torturas

Desde que fuera nombrado el 1 de septiembre de 1969 como funcionario en prácticas, su carrera policial fue fulgurante. Se especializó en infiltrarse en el movimiento estudiantil antifranquista, y

la primera condecoración que recibió, el 10 de agosto de 1970, fue por su “eficiente labor” en “actividades estudiantiles”.

En esos años llegó a recibir 25 felicitaciones públicas, con suculentas recompensas (entre las 1.500 y las 30.000 pesetas) por detener a estudiantes que militaban en organizaciones clandestinas, por repartir propaganda o participar en asambleas. El 26 de julio de 1972 recibió una cruz al mérito policial con distintivo rojo, así logró un plus del 10% en su pensión. El 25 septiembre de 1975, dos días antes de los últimos fusilamientos del franquismo (participó en las detenciones de algunos de ellos), la Dirección General de Seguridad le promocionó 500 puestos en el escalafón policial.

Todos estos premios y ascensos estaban relacionados con su papel en la lucha “contra la subversión”. Su apodo se lo pusieron los que sufrieron sus torturas porque solía sacar con facilidad la pistola y amenazar de muerte si no decían lo que quería oír.

“Mi familia no sabía dónde estaba. Me abrieron la cabeza y me dieron golpes en todo el cuerpo. A veces estaba desnudo. Cuando no podía moverme me tenían como un fardo esposado a un radiador en un pasillo, y cuando pasaba un poli te volvían a golpear o te apagaban un cigarro en la cabeza (...) Pacheco era de los que más estaban presentes. Era un torturador compulsivo, disfrutaba y presumía de ello. Te miraba y te decía: ‘He sido yo, Billy el Niño, el que te ha hecho estas cosas’. Le gustaba su apodo. Era pequeño y debilucho. No causaba mucha impresión, andaba todo el día con la pistola en la mano para dar miedo. Y tenía una mente muy retorcida” (José M^a Galante, alias *Chato*, militante de la LCR, fundador de La Comuna-Prexss del Franquismo, y fallecido recientemente por coronavirus).

“González Pacheco y cuatro inspectores de la Brigada Político-Social entraron en mi casa tumbando la puerta el 8 de octubre de 1974. Estaba sola [...] Al oírlos me escondí [...] dieron conmigo, me sa-

caron de los pelos, a empujones, patadas y bofetadas. Me llevaron hasta la ventana del comedor que estaba abierta y me acorralaron. Pensé que querían tirarme por ella y comencé a gritar pidiendo auxilio. Billy el Niño, metiéndome un pañuelo en la boca, empezó a darme puñetazos” (Felisa Echegoyen, militante de la LCR en aquellos años).

Testimonios similares los hay por decenas.

En la Transición y después... la impunidad de un torturador protegido por el Estado

Durante la Transición, no solo no fue depurado y juzgado sino que recibió más medallas que durante la dictadura: un total de cuatro.

La primera se la otorgó el Gobierno de Adolfo Suárez, el 13 de junio de 1977, tras la liberación del presidente del Consejo de Estado, Antonio M^a de Oriol, y el teniente general Emilio Villaescusa, secuestrados por los GRAPO. Dicha condecoración, con distintivo de plata, aumentó su pensión otro 15%. El 27 de junio, el Ejército le condecoró con la cruz al mérito militar con distintivo blanco. El 10 de octubre de 1980 le fue concedida una tercera, con distintivo rojo, por el Ministerio del Interior. Y la última, de plata, es del 30 de marzo de 1982, y se concedió a toda la Brigada de Información. Todas ellas incrementaron en un 50% la cuantía de su jubilación. ¡Así paga la democracia burguesa a sus represores!

Ministros como Rodolfo Martín Villa justificaron la utilización de las policías torturadoras como Billy el Niño para la “lucha antiterrorista”. Con los Pactos de La Moncloa y la Ley de Amnistía, apoyadas tanto por el PSOE como por el PCE, todos los delitos de torturas, represión y asesinatos cometidos por las fuerzas de orden público franquistas quedaron totalmente impunes.

En la democracia burguesa española, figuras como la de Antonio González Pacheco, fueron la norma. Tras participar

en “brigadas antiterroristas” (el preludeo del terrorismo de Estado de los GAL) e incluso ser juzgado (aunque salió absuelto) por haber intervenido en la matanza de los abogados laboristas de Atocha, se retiró de la policía y el PSOE le permitió durante los años 80 y 90 hacer suculentos negocios en la empresa privada, trabajando para firmas como Renault.

Es necesaria, de una vez por todas, justicia y reparación para las víctimas del franquismo

En los últimos años, gracias al impulso de las víctimas de sus torturas y de las asociaciones memorialistas, se ha ido conociendo la actividad represora de este individuo. Sin embargo, su protección por parte del aparato del Estado ha contado con la complicidad de los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP, que se han mantenido firmes defendiendo un vergonzoso carpetazo a los crímenes franquistas.

Dentro de la jefatura de policía contó con importantes lazos. Gerifaltes como el responsable de la policía del distrito de Ciudad Lineal en Madrid, José Manuel Mariscal, invitó a González Pacheco a sus fiestas en la comisaría. La justicia española ha impedido que se le juzgara en nuestro país y que fuera extraditado a Argentina para ser procesado allí. El PP de Rajoy no permitió su extradición, ni que se conocieran las condecoraciones que los Ejecutivos de Felipe González y Rodríguez Zapatero mantuvieron. El Gobierno de coalición de PSOE-UP, que prometió quitarle las medallas, no ha hecho nada por llevarlo a cabo, ni tampoco para juzgarlo. Y ha permitido que siguiera percibiendo incentivos por sus premios por maltratar a luchadores antifranquistas.

Tras su muerte, hemos visto como a líderes de UP, como Pablo Iglesias e Irene Montero, colgar tuits “lamentando” y mostrando “rabia” por que muriera con todo tipo de condecoraciones y honores, así como pidiendo perdón a las víctimas del franquismo. Pero esto suena a lágrimas de cocodrilo, cuando hace más de un año (en otoño de 2018) que Pedro Sánchez prometió retirar sus medallas. Este es el precio a pagar por rendir tributo al régimen del 78, en lugar de luchar consecuentemente contra una legalidad que ampara la impunidad del franquismo.

¡Basta ya de esta vergüenza! No queremos gestos, queremos hechos. Que los torturadores y los responsables de los crímenes de la dictadura sean llevados ante la justicia. Que se derogue la Ley de Amnistía. Que se haga justicia con las víctimas y se las repare moral y económicamente. Que se depure el aparato estatal de reaccionarios y fascistas y se les suprima sus privilegios, sus condecoraciones, medallas y pluses en sus jubilaciones. Solo así se conseguirá de verdad honrar a los luchadores antifranquistas.



La Guardia Civil se une a la ofensiva de Vox y del PP contra el Gobierno



Víctor Taibo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Desde hace semanas asistimos a una ofensiva de Vox y el PP en las calles, a la que ahora se ha sumado abiertamente una parte del aparato del Estado. El cese del reaccionario coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, ha desatado las iras del cuerpo e intensificado la campaña patriótica de la derecha y sus medios de comunicación en defensa de esa España “una, grande y libre” que tanto añoran.

Su padre fue el candidato de Fuerza Nueva por Murcia en 1977, y él mismo apoyó el golpe de Estado del 23-F, presentándose voluntario con la camisa azul falangista en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla. En 1992 fue procesado por torturas al miembro de ETA Kepa Urrea, siendo condenados tres de sus compañeros de la Benemérita. Aunque fue absuelto, la jueza ponente del tribunal calificó de “sorprendente” su presencia en el hospital donde Urrea señaló que continuaron torturándole. Tanto Amnistía Internacional como el Comité contra la Tortura de la ONU denunciaron el caso. Finalmente, los guardias civiles condenados no entraron en prisión al ser indultados por el Gobierno de Aznar.

Los montajes de la Guardia Civil, del 1-O al 8-M

Pérez de los Cobos dirigió y coordinó en 2007 la brutal represión en Catalunya para tratar de impedir el referéndum del 1-O, que se saldó con más de mil heridos.

También en este caso, tal y como ha ocurrido ahora con la manifestación del 8-M, se fabricó un informe policial para el juicio-farsa contra los dirigentes independentistas, llegando a afirmar en su declaración ante el Tribunal Supremo que no hubo “cargas policiales”.

En el caso de la investigación del 8-M la forma de actuar ha sido similar: los testimonios de varios testigos fueron directamente manipulados, el informe contiene numerosos errores de bulto —como que la OMS declaró la pandemia en enero, cuando fue el 11 de marzo—, y gran parte de las informaciones no han sido contrastadas.

Esto no solo justificaría la destitución de Pérez de los Cobos y los guardias civiles implicados, sino la apertura de una investigación para depurar responsabilidades incluso a nivel penal. ¿O es que no es relevante que se manipulen pruebas y se construyan casos a medida? ¿No es justamente lo que hacía el franquismo contra sindicalistas, militantes de izquierdas y opositores?

No es casualidad que la furia de la derecha y la extrema derecha, de la Guardia Civil y de sectores de la judicatura, se dirija contra la manifestación del 8-M. Se trata de atacar a un movimiento que ha puesto en evidencia la naturaleza machista y reaccionaria del Estado y sus instituciones, que amparan a individuos como los de La Manada, guardias civiles y militares que se han creído y se creen impunes.

Se busca además criminalizar la protesta social y a los colectivos y activistas de izquierdas que durante años no hemos dejado de salir a las calles por los derechos de la mujer trabajadora, por los servicios públicos, o contra la represión

¡Hay que depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios!



del Estado y en defensa de nuestros derechos democráticos.

Una aparato del Estado plagado de franquistas heredado de la Transición

Pero la presencia de estos franquistas y reaccionarios en el aparato del Estado, en la judicatura, en la Guardia Civil o en la policía, es la consecuencia de la política de colaboración de clases consagrada durante la Transición, y que lamentablemente apuntalaron las direcciones tanto del PSOE como el PCE.

El propio Pérez de los Cobos ascendió en el Ministerio del Interior de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el Gobierno de Zapatero, manteniéndose en su puesto con Rajoy y posteriormente con Pedro Sánchez. Fue uno de los principales colaboradores del exministro del Interior del PP Fernández Díaz, con quien comparte su afiliación a la secta ultra católica del Opus Dei, colaborando con esas cloacas del Estado que tanto ha denunciado Pablo Iglesias. A pesar de todo, no ha sido removido de su puesto hasta ahora, dos años después de la caída de Rajoy.

El actual ministro del Interior, Grande Marlaska, en consonancia con su actuación como juez en la Audiencia Nacional, ha sido uno de los que más ha contribuido a que esto haya sido así. Hay que recordar que Marlaska archivó la causa del Yak-42 —viéndose obligado posteriormente a reabrirlo—, juzgó a los diarios *Deia* y *Gara* por injurias a la Corona e instruyó, entre otros, el caso Gazte Independentistak, por el que 40 jóvenes abertzales pasaron dos años en prisión preventiva para finalmente ser absueltos por la Audiencia Nacional. Un buen

ejemplo de que los montajes y causas-farsa no son casos aislados.

La Guardia Civil, un pilar de la reacción

La Guardia Civil siempre ha sido uno de los pilares de la reacción en el Estado español. Un cuerpo militarizado creado para enfrentar las sublevaciones campesinas por el pan y la tierra, y en defensa de los privilegios de la aristocracia terrateniente. Fue uno de los pilares del golpe de Estado de Franco en julio del 36 y durante la dictadura fue la fuerza de choque contra los maquis y cualquier intento de resistencia antifranquista. En la Transición, y ya con la democracia, el cuerpo continuó actuando sin miramientos, con los mismos mandos e individuos que torturaban y asesinaban en el pasado.

Miembros de la Guardia Civil protagonizaron el golpe de Estado del 23-F, y jugarían un papel destacado en el terrorismo de Estado de los GAL, bajo los Gobiernos de Felipe González, siendo condenado su máximo responsable en Guipúzcoa, Enrique López Galindo, por los asesinatos de Lasa y Zabala.

Por otro lado, todos aquellos que han osado levantar la voz desde posiciones de izquierdas y organizarse han sido perseguidos, sancionados y en algunos casos expulsados del cuerpo, aprovechando la ausencia de los más mínimos derechos democráticos debido a su naturaleza militar.

Depurar el aparato del Estado y derogar toda la legislación de excepción. ¡No a la Ley Mordaza!

Nos encontramos ante un aparato del Estado plagado de franquistas y reaccionarios, que ahora levantan cabeza ante la

ofensiva de Vox y del PP, y que ven una oportunidad de ajustar cuentas con la izquierda. Son los mismos que han participado en misas y cenas por Franco o en homenajes a Tejero en cuarteles de la Guardia Civil.

En este contexto no se puede hablar de la ofensiva de la extrema derecha, como hacen muchos dirigentes de UP, y omitir el papel de estas instituciones del Estado que siguen manejando los resortes de la judicatura, el ejército o la policía. Estamos hablando de la propia naturaleza del Estado capitalista —especialmente reaccionario en el caso del Estado español— que no resulta alterada por que exista un nuevo Gobierno de izquierdas.

Hay desmontar toda la legislación de excepción aprobada durante años, incluyendo la de los Gobiernos del PSOE, dirigida a combatir a la izquierda, al sindicalismo y a los movimientos sociales. Resulta insólito que a día de hoy, con un Gobierno con presencia de UP, siga vigente la Ley Mordaza, y que esta se haya aplicado para imponer miles de sanciones durante el estado de alarma. Toda esta legislación será la que utilizarán mañana Vox y el PP para perseguirnos y encarcelarnos.

Es necesario, por tanto, contrarrestar esta ofensiva de la reacción con la movilización en las calles, y con políticas de izquierdas, anticapitalistas, que resuelvan los problemas que padecemos la inmensa mayoría. Este Gobierno debe reaccionar, comenzando por depurar de franquistas y reaccionarios el aparato del Estado, desmilitarizar inmediatamente la Guardia Civil, y cortar de raíz la actitud golpista que vemos en muchos jueces, militares y mandos policiales que simpatizan con el PP y Vox, e incluso militan en grupos de ultraderecha.

Paremos los pies a la extrema derecha

¡Ninguna agresión sin respuesta!



Sindicato de Estudiantes /
Izquierda Revolucionaria
Andalucía

En los últimos días y al calor de las movilizaciones alentadas por Vox y el PP, en Andalucía hemos sufrido varios ataques de la derecha y la extrema derecha a los militantes y activistas de la izquierda.

La primera fue a un compañero de la UGT en Málaga. Ocho fascistas, que habían participado en la manifestación convocada por la extrema derecha en la calle Larios, le dieron una paliza mientras estaba indefenso en el suelo. La segunda tuvo lugar en la ciudad de Granada, los fascistas entraron en casa de un conocido activista de las marchas por la dignidad y agredieron brutalmente a él y su familia para quitar después la bandera republicana que colgaba de su balcón.

El domingo 24 de mayo, tres compañeros del Sindicato de Estudiantes de Málaga sufrieron la persecución, acoso y amenazas de un elemento de la extrema derecha, al ser reconocidos por su papel al frente de las huelgas estudiantiles en defensa de la educación pública, de la mujer trabajadora y el colectivo LGTBI.

Esta agresión ocurrió, no por casualidad, justo después de que el sábado 23 de mayo los fascistas organizaran una “caravana por España” que contó en Málaga con unos cientos de vehículos y con la que pretendían mostrar el músculo de la base social de la reacción.

Las bandas y elementos fascistas que nos están atacando responden así a las grandes victorias que hemos impuesto con nuestra lucha: defendiendo los de-

rechos de la mujer trabajadora, de nuestros hermanos y hermanas refugiados e inmigrantes, levantando las marchas de la dignidad, la marea blanca y la marea verde para impedir la privatización de la sanidad y la educación públicas, tumbando las reválidas franquistas del PP, etc. Unas luchas que han sido decisivas para echar al PP de La Moncloa e imponer un Gobierno de la izquierda.

La patronal y la derecha necesitan atacarnos y acabar con la capacidad de lucha de la clase trabajadora para mantener sus enormes beneficios y están decididos a hacerlo como históricamente lo han hecho: mediante la violencia y agresión para amedrentarnos.

¡Basta ya de impunidad!

Es realmente pasmosa la impunidad de la gozan estos elementos, mientras incum-

plen todas las medidas sanitarias de seguridad —en la manifestación de la calle Larios en Málaga— son tratados con la mayor amabilidad por la policía. La situación no es distinta cuando salen a perseguir y apalean a sindicalistas o activistas de la izquierda. ¡Es una auténtica vergüenza y no lo podemos permitir!

Esta impunidad es la que les da alas para seguir extendiendo el odio y persiguiendo a activistas sociales y de izquierdas, sindicalistas, inmigrantes, a personas LGTBI. La única forma de parar la ofensiva de la reacción es respondiendo con la movilización y la lucha. La maravillosa respuesta de la juventud y las y los trabajadores en los barrios obreros de Madrid —expulsando a estos grupos

fascistas con concentraciones y manifestaciones de repulsa por parte de los vecinos— marca el camino. ¡Así se combate al fascismo! No vamos a esperar de brazos cruzados a que “los fascistas se cansen” ni a mirar para otro lado mientras nos agreden.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones y colectivos de la izquierda, a denunciar esta situación y a frenar al fascismo y la ofensiva de la extrema derecha con la movilización más amplia y contundente de los trabajadores y la juventud. ¡No pasarán!



Hemos paralizado la vuelta a las aulas del Gobierno Vasco

¡La lucha sirve!



Ikasle Sindikatua /
Sindicato de Estudiantes

¡El 25 de mayo tampoco
volvemos a clase!



**HUELGA
ESTUDIANTIL
INDEFINIDA**

¡Con nuestra salud
y nuestro futuro no se juega!

Consulta nuestra web
www.ikaslesindikatu.net



Contra la irresponsabilidad del Gobierno Vasco:

¡Por un plan de rescate a la
educación pública ya!

La vuelta a las aulas que pretendía imponer el PNV al frente del Gobierno Vasco ha sido un auténtico fracaso gracias a la presión ejercida por los estudiantes junto a los profesores y familias. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la huelga general estudiantil porque no se daban las mínimas condiciones de seguridad para el reinicio de las clases. Lo dijimos y lo mantenemos: ¡con nuestra salud y nuestro futuro no se juega!

El PNV ha retrocedido por la presión de la comunidad educativa

Según los datos ofrecidos por el Gobierno Vasco, el 25 de mayo abrieron sus puertas el 20% de los institutos y “la casi totalidad de la FP”. Pero esto

no tiene nada que ver con la realidad. La asistencia a las aulas ha sido mínima, prácticamente nula.

El PNV ordenó la vuelta a las aulas por una razón muy concreta: contentar a sus amigos de la patronal. No fueron ni criterios sanitarios ni mucho menos educativos, sino que pretendía mandarnos a las aulas para incorporar a nuestros padres y madres a sus puestos de trabajo y seguir engordando los beneficios de las empresas.

También ha sido su prioridad realizar los exámenes en los que nos jugamos la titulación o el acceso a estudios superiores para mantener la criba contra las familias trabajadoras. Nekane Murga, consejera de Salud, hablaba de que la vuelta a clase nos enseñaría “la disciplina social que hace falta”. Esta es la disciplina de la explotación que tanto le gusta a la derecha y la patronal vasca.

Sin embargo, la consejera de Educación sigue haciendo oídos sordos a

la oposición generalizada de la comunidad educativa y ha planteado que para los profesores la vuelta sea obligatoria. Continúa presionando permanentemente para que las aulas se abran y se realicen los exámenes, aunque públicamente dijo que la decisión estaría en manos de los centros. Contra sus chantajes, negligencia y autoritarismo la lucha es hoy más necesaria que nunca.

La única opción que nos han dejado para defender nuestra salud y nuestro futuro ha sido la huelga. Y encima pretenden criminalizarnos, tachándonos de vagos a los que les gusta saltarse las clases. Nada más lejos de la realidad.

Nuestra lucha es precisamente para defender el derecho a una educación pública de calidad, que se nos niega a base de recortes, privatizaciones y leyes clasistas para expulsar a las hijas e hijos de las familias trabajadoras del sistema educativo.

La huelga estudiantil y la oposición del profesorado a volver a las aulas demuestran que podemos vencer al PNV. Para que el próximo curso nuestra salud y nuestro derecho a la educación esté garantizado es necesario levantar un plan de lucha de toda la comunidad educativa y exigir al Gobierno Vasco y al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que pongan inmediatamente en marcha un plan de rescate de la educación pública.

¡La lucha sigue!

Para garantizar nuestra salud y nuestro derecho a la educación

¡Por un plan de rescate a la enseñanza pública!



Sindicato de Estudiantes

La brutal crisis sanitaria del coronavirus ha profundizado aún más la situación de emergencia social que sufre la educación pública, provocada por años de recortes y políticas de privatización del Partido Popular. Tan solo en los últimos ocho años en la universidad pública se han perdido más de 9.500 millones de euros de presupuesto, se ha despedido a más de 30.000 profesores de todos los tramos educativos y más de 50.000 estudiantes de enseñanza secundaria han tenido que recibir sus clases en barracones durante el curso 2019/20.

El resultado de estas políticas de la derecha para dismantlar la educación pública y hacer negocios millonarios con nuestro derecho a la educación, sumado a la ineficacia de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, ha sido desastroso. La brecha social existente en el terreno educativo —puesta de manifiesto con el fracaso de las clases online— no ha hecho más que profundizarse.

Revertir los recortes, contratar más profesores y reducir los ratios

La ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno para revertir esta situación ha cargado sobre los estudiantes un estrés insostenible. Se han empeñado en terminar el curso a pesar de no haber puesto los medios para garantizar el acceso a la educación en estos meses a miles de alumnos. Sus tibias medidas para el cierre del año educativo ni siquiera han blindado la promoción de curso —es decir, que todos los estudiantes pasemos de curso y que, sin excepción, se nos haga la media escolar con las notas de las dos primeras evaluaciones—, ni se han suspendido los exámenes ni las prue-

bas de la EBAU, que se realizarán a pesar del peligro de contagio del que alertan todos los expertos.

Hace unas semanas la ministra Isabel Celaá reconoció que no saben cómo podremos empezar el curso que viene, pero dejó claro que no aumentará el presupuesto educativo. De ser así, esto tendrá consecuencias desastrosas, más aún si tenemos en cuenta que con la crisis económica que se avecina, la permanencia en el sistema educativo y el acceso a los estudios superiores serán determinantes para el futuro de los jóvenes de barrios humildes.

La única salida para los estudiantes de familias trabajadoras, que somos quienes estamos sufriendo más crudamente las consecuencias de este dismantamiento de la educación pública, es romper con los ataques de la derecha y revertir sus recortes y contrarreformas clasistas. Eso es lo que demandamos desde el Sindicato de Estudiantes: una política de izquierdas, un verdadero escudo social que tenga como prioridad cubrir las necesidades sociales y no llenar los bolsillos de unos cuantos empresarios.

No es casualidad que días más tarde, el ministro de Universidades anunciara que se incrementará la inversión en el sistema de becas en un 22% hasta alcanzar los 1.900 millones de euros para elevar el número de estudiantes beneficiarios el próximo curso 2020-2021. Un paso adelante fruto de la presión que millones de estudiantes, profesores y familias llevamos ejerciendo desde hace años contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para combatir la exclusión so-

cial que existe en la universidad pública tras años de privatización y tasas abusivas y que no tiene en cuenta el brutal golpe económico que está suponiendo esta crisis en nuestras familias.

El Gobierno tiene que invertir ya el 7% del PIB en la educación pública

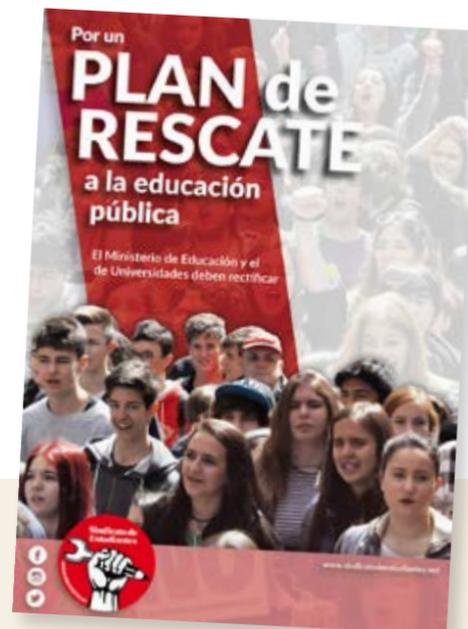
Todas las políticas que vayan en la dirección de garantizar que los hijos e hijas de la clase trabajadora podamos garantizar nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad y que podamos acceder a la universidad, serán celebradas por la comunidad educativa. Pero la única forma de romper con el modelo educativo de la derecha y sus consecuencias dramáticas pasa por adoptar medidas mucho más contundentes.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene una tarea muy clara: revertir todas las medidas clasistas y los recortes de los Gobiernos del PP que nos han llevado a esta situación. La única manera de hacer frente a esta crisis sin empujar a miles de estudiantes a poner en riesgo su salud en primer lugar y evitar el abandono y el fracaso escolar es poner en marcha un plan de rescate urgente a la educación pública.

Un plan de rescate que dedique de forma inmediata el 7% del PIB a la enseñanza pública, que permita luchar contra la desigualdad social y garantice las medidas de seguridad y salud necesarias ante esta pandemia, que garantice una educación 100% pública y gratuita desde infantil hasta la universidad, la contratación masiva de profesorado —según CCOO,

es necesario contratar a 165.000 profesores para reiniciar las clases en septiembre en condiciones—, que se elimine de una vez por todas la EBAU y las notas de corte, que se haya plazas para todos en los estudios superiores y que se deje de regalar dinero público a la educación privada y concertada.

No hay ninguna razón para que estas demandas no sean atendidas. Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos el mantra de que “no hay dinero” para llevar este plan a cabo. Nada más empezar la pandemia se aprobó un paquete de 100.000 millones de euros para los grandes empresarios, la banca y el Ibex-35. ¡Por supuesto que hay recursos! Pero los tienen los de siempre. Exigimos que se destinen todos los recursos necesarios para garantizar una educación, sanidad y vidas dignas para todas y todos. Por ello seguiremos luchando para que este Gobierno cumpla con todas las demandas de la comunidad educativa. Está en juego nuestro futuro y no vamos a renunciar a él.



Descarga en PDF la propuesta del Sindicato de Estudiantes pinchando en este anuncio





Un análisis desde el sindicalismo combativo

¿Quién saldrá beneficiado del nuevo acuerdo entre la CEOE, CCOO-UGT y el Gobierno?



Antonio García Sinde
Izquierda Revolucionaria
Madrid · Portavoz de
Sindicalistas de Izquierda

El acuerdo firmado el pasado 11 de mayo por el Gobierno, la CEOE y los máximos dirigentes de CCOO y UGT ha sido presentado como un paso más en el llamado “Escudo Social”. Pero cuando descendemos a la letra pequeña, nos encontramos con que este nuevo pacto social sirve esencialmente para que la patronal siga haciendo caja gracias los recursos públicos, y para abaratar los despidos masivos que preparan.

Despido más fácil y más barato

Lo primero que establece es la garantía de que se seguirá pagando con dinero público la parte del león de los costes empresariales.

Para ello se crea la figura del ERTE parcial por fuerza mayor, que permite a los empresarios retomar su actividad manteniendo las espléndidas exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social establecidas para los casos de cierre total de empresas a causa de las medidas de confinamiento. Además, se facilita la transformación de los ERTE por fuerza mayor en ERTE ordinarios, de manera que el empresario pueda mantener a una parte o a toda su plantilla sujeta a una reducción de ingresos y a la incertidumbre de la vuelta o no al trabajo.

El Decreto aprobado el 12 de mayo ha finalizado el 30 de junio la disposición

que establecía que la prestación por ERTE no consumía los derechos a la prestación por desempleo acumulados por el trabajador, o que garantizaba su cobro a pesar de no tener acumulado el mínimo de cotizaciones exigido. A partir del 1 de julio cientos de miles de trabajadores seguirán en ERTE pero consumiendo su desempleo o sin posibilidades de ingresar nada.

Por otro lado, aumenta las facilidades para el despido. La famosa cláusula de “Salvaguarda del Empleo” establecida en marzo, y que obligaba a las empresas con ERTE a garantizar el empleo durante seis meses, se modifica hasta el punto de que no solo anula la mayoría de las supuestas garantías frente al despido sino que incluso se empeoran algunas de las situaciones previas a la pandemia.

La cláusula ya no se aplicará a los trabajadores sujetos a ERTE ordinarios, que son más de 300.000, ni a los trabajadores no incluidos en regulación de empleo de una empresa con ERTE parcial. Además, los seis meses de supuesta limitación de despidos empiezan a contar desde el momento en que el primer trabajador en ERTE se reincorpore al trabajo, es decir, que reincorporando en mayo a un solo trabajador, en noviembre la empresa ya podría despedir a afectados por ERTE sin restricciones.

Adicionalmente se establece tal cantidad de excepciones para sortear esa “salvaguarda” que, en la práctica, la supuesta “prohibición del despido” ahora ya desaparece por completo.

Pero la situación es mucho peor para los más de cuatro millones de traba-

adores sujetos a contratación temporal por obra o servicio. Con el nuevo decreto ya no hace falta ni siquiera esperar a que termine la obra o servicio para dar por extinguida la relación laboral. Basta con que el empresario alegue que “no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación” para que el contrato se acabe.

Por último, para los empresarios que a pesar de todas las facilidades despidan a trabajadores afectados por un ERTE, las sanciones previstas en el Decreto son meramente simbólicas.

Los empresarios no son nuestros aliados

En estas semanas hemos tenido que escuchar los elogios constantes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del vicepresidente Pablo Iglesias a los empresarios de este país. Los ministros de Unidas Podemos siguen la estela de los dirigentes del PSOE en su apoyo sin fisuras a las políticas de colaboración de clase.

Sin embargo, los empresarios y capitalistas de nuestro país no han cambiado en nada. Siguen practicando un fraude fiscal monumental, que según las cifras que afectan a las grandes fortunas y grandes empresas está por encima de los 60.000 millones de euros al año.

Ante los cientos de miles de nuevos parados y la miseria que se extiende por los barrios obreros los empresarios solo ven la oportunidad que se les abre de sustituir a sus plantillas actuales por nuevas contrataciones de trabajadoras y tra-

bajadores que, obligados por la más extrema necesidad, aceptarán cualquier tipo de trabajo por penosas que sean sus condiciones y miserables los salarios. Los empresarios aprovechan la crisis del coronavirus para incrementar sus beneficios, provocando así el aumento de la desigualdad social y la extensión de la pobreza.

El deterioro de las medidas de seguridad ha provocado que las muertes en accidente de trabajo crecieran este trimestre un 29% respecto al mismo período del año anterior, y la negociación colectiva ha sufrido un frenazo histórico: mientras en abril de 2019 se firmaron 139 convenios que afectaban a casi 200.000 trabajadores, este mes de abril se firmaron 10, que incluían solo a 3.200 trabajadores.

Las declaraciones de la patronal del metal (Confemetal) no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones: “la negociación colectiva está muerta este año”; y añaden que incluso los minúsculos incrementos salariales pactados con CCOO y UGT para 2020 son ahora “absolutamente disparatados”. Así anuncian la cascada de descuelgues de convenio colectivo que miles de empresas ya están preparando para complementar sus planes de despidos masivos.

Pero lo peor es que la no renovación de los convenios ya vencidos, o que van a vencer en los próximos meses, permitirá a los empresarios contratar nuevos trabajadores fuera de convenio.

Con la ayuda de los decretos del Gobierno y con la complicidad de los dirigentes de CCOO y UGT se han creado las condiciones para que los empresarios den un gran salto adelante en su sueño de sustituir empleo fijo, con condiciones más o menos dignas, con protección de un convenio colectivo y con reconocimiento de antigüedad, por empleo precario desprovisto de cualquier derecho.

Por un sindicalismo combativo y de clase que plante cara a la patronal

La política de las cúpulas de CCOO y UGT, del “mal menor”, no despierta ningún entusiasmo entre miles de delegados y afiliados que se unieron en su día a esos sindicatos para defender sus derechos. Estas direcciones burocráticas aprovechan el shock y la incertidumbre que golpea a millones de familias para imponer una política que ha fracasado.

Por el momento han conseguido acallar cualquier brote de crítica surgido entre sus filas. Las facilidades del Gobierno para que los dos grandes sindicatos puedan firmar ERTE a espaldas de los trabajadores afectados, unidas a las limitaciones impuestas por el estado de alarma, han ayudado a ahogar cualquier tipo de protesta laboral.

Pero esta situación no va a durar indefinidamente. A medida que los planes de la patronal se vayan desarrollando, a medida que los ERTE de hoy se vayan transformando en ERE, las tradiciones de lucha y combatividad de la clase obrera del Estado español resurgirán con fuerza.

Desde la red de Sindicalistas de Izquierda tenemos claro que la organización en los centros de trabajo es más necesaria que nunca, lo mismo que defender un sindicalismo combativo y de clase basado en la confrontación con las patronales y en la movilización de nuestra inmensa fuerza como trabajadores. Un sindicalismo que se apoye en un programa socialista y que ofrezca una alternativa para superar el sistema capitalista.

El Gobierno coloca a una mermada Atención Primaria en primera línea de contención del virus



La cura del coronavirus: una carrera para hacer negocio con nuestra salud



¡Ningún despido en Nissan!

¡Nacionalización bajo control de los trabajadores!



Comunicado conjunto de Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes y Sindicalistas de Izquierda

Este 28 de mayo la multinacional Nissan comunicaba oficialmente al gobierno el cierre de las factorías de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca. Tras obtener beneficios durante décadas explotando y recortando derechos a los trabajadores, tras llenarse los bolsillos aprovechándose de un sinfín de subvenciones y ayudas públicas, estos parásitos muestran su desprecio por los trabajadores y sus familias echando a más de 3.000 a la calle y provocando la destrucción de más de 20.000 puestos de trabajo indirectos.

Inmediatamente los trabajadores han tomado las calles en varios puntos de Barcelona paralizando el tráfico, respetando los protocolos de seguridad por la pandemia, pero mostrando su indignación y disposición a luchar hasta el final para impedir el cierre y defender los empleos. Esta movilización ha despertado una ola de solidaridad entre el conjunto de la clase obrera de Catalunya y del resto del Estado.

Reflejando el tremendo apoyo a la lucha y la indignación existente, la CUP e incluso diputados como Gabriel Rufián (ERC) e Iñigo Errejón (Más País) se han declarado a favor de que la empresa sea nacionalizada para mantener la producción y salvar los puestos de trabajo.

Por su parte, el vicepresidente Pablo Iglesias, tras afirmar inicialmente que “las nacionalizaciones son perfectamente posibles según la Constitución”, hacía una referencia posterior completamente inaceptable a “no caer en la trampa de pensar que las nacionalizaciones son de izquierda”. Lamentablemente Pablo Iglesias parece que cambia de parecer en función de la presión que recibe de la patronal, y aquí de lo que se trata es precisamente de lo contrario. Iglesias debe rectificar urgentemente y entender que este Gobierno debe tomar cartas en el asunto y defender los empleos. La nacionalización bajo control obrero es la única solución.

La lucha de Nissan debe convertirse en un punto de referencia para toda la clase obrera. Conseguir su nacionalización y salvar todos los puestos de trabajo es perfectamente posible si los sindicatos con presencia en la empresa, y especialmente CCOO, UGT y CGT, lo

defienden y orientan la lucha en este sentido. Lo mismo se puede decir del conflicto abierto en Alcoa, que sigue el mismo patrón de las multinacionales que se han llevado los bolsillos con las subvenciones del Estado, y con concesiones laborales y salariales constantes, pero que ahora abandonan a sus plantillas sin ningún miramiento.

¡Hay que ocupar los centros de trabajo y extender la lucha!

Los dirigentes de CCOO, UGT y CGT deben basarse en la fuerza de la plantilla, que es mucha, en los trabajadores de todas las empresas auxiliares, y en la población de Barcelona y de todas las localidades implicadas, para plantear un plan de lucha contundente tal como requiere la situación.

Un plan de lucha que debe pasar por medidas serias y a la altura de la agresión patronal:

1. Ocupación de todas las factorías de Nissan para evitar que la empresa pueda sacar maquinaria y desbaratar la producción. Establecer comités de control obrero en todas las factorías elegidos por las asambleas de trabajadores. Llamar también a los trabajadores de todas las empresas auxiliares a la huelga indefinida y la ocupación de todas ellas.

2. Convocar un plan de manifestaciones masivas en todas las localidades afectadas, llamando a participar a toda la población y especialmente a la juventud.

3. Por la importancia de la factoría catalana de Nissan, organizar la huelga general en toda la provincia de Barcelona y utilizar esta jornada de huelga para extenderla al resto de localidades donde Nissan tiene factorías.

4. Coincidiendo con la huelga en Barcelona, que los grandes sindicatos llamen a un paro general de 24 horas en todo el sector de la automoción del Estado español, y a paros de solidaridad en todas las empresas del metal y astilleros, y puertos.

5. Exigir al Gobierno PSOE-UP y a la Generalitat la nacionalización inmediata de Nissan bajo control de los trabajadores y un plan de inversiones que recupere la producción y mantenga la totalidad de los puestos de trabajo.

Durante la pandemia, los trabajadores de Nissan produjeron respiradores para las UCI, demostrando que la capacidad industrial de empresas como esta es vital para el conjunto de la sociedad y no puede ser destruida. Además, las actuales factorías de Nissan poseen tecnología y mano de obra cualificada para producir vehículos eléctricos tanto para el uso individual como para impulsar un transporte colectivo ecológicamente más sostenible y eficiente, maquinaria para la producción agrícola y cubrir otras muchas necesidades sociales.

Hoy es más posible que en cualquier otro momento a lo largo de las últimas décadas levantar una marea social de apoyo a la nacionalización de Nissan y generar la presión suficiente para obligar al Gobierno central y de la Generalitat a aplicar esta medida y salvar los miles de empleos amenazados por el cierre.

Si los dirigentes de CCOO y UGT se niegan a defender la nacionalización y llevar a cabo el plan de extensión de la lucha que se necesita para conseguirla, los dirigentes de CGT tienen que plantear este plan de movilización al conjunto de la plantilla de manera clara y decidida. Que se vote y se decida. Lo que nos jugamos es el presente y el futuro.

No hay ni un minuto que perder. Todo el dinero público e inversiones que el Gobierno central y la Generalitat están ofreciendo a Nissan deben destinarse a nacionalizar sin indemnización y a reactivar la empresa bajo control de los trabajadores. Estos sí velarán por que cada euro a invertir vaya a producir, no como ha hecho la multinacional durante los últimos 15 años, llevándose millones en subvenciones y ayudas mientras incumplía todos sus compromisos y reducía la producción al 20% de su capacidad.

**¡Toda la solidaridad con los trabajadores de Nissan!
¡Su lucha es nuestra lucha!**



Apoya la campaña contra el ERTE en COMSA

La empresa utiliza el Covid-19 para despedir trabajadores



Sección sindical
FTC-IAC
Comsa Service · Tarragona

Comsa Service tiene más de mil trabajadores a nivel estatal y se encarga del mantenimiento eléctrico de edificios pertenecientes a instituciones dependientes del Gobierno central y de algunos autonómi-

cos (como la Generalitat de Catalunya) y municipales. Antes de la pandemia estaba despidiendo arbitrariamente y empeorando las condiciones laborales. Ahora, aprovecha para plantear un ERTE aunque mantiene sus contratos y sigue recibiendo centenares de miles de euros de dinero público.

Los nueve delegados de los comités de Barcelona y Madrid firmaron el ERTE

sin consultar a la plantilla. FTC-IAC, el comité de empresa de Comsa Tarragona y otros muchos delegados y trabajadores de diferentes centros hemos decidido dirigirnos al Ministerio de Trabajo para exigir que lo impugne y sea paralizado.

La aplicación del ERTE significará también rebajar la calidad del servicio y degradar estas infraestructuras públi-

cas. Los servicios que hoy presta Comsa deben ser recuperados por el Estado, nacionalizando la empresa y subrogando a todos los trabajadores.

Pincha aquí para firmar y enviar la RESOLUCIÓN DE APOYO



plan integral en el que los sectores fundamentales de la economía, empezando por la banca, sean públicos y se organicen en función de los intereses de la mayoría.

Defender el empleo exige un plan de lucha contundente

Los dirigentes de CCOO y UGT, de la mano de estos saqueadores, se han limitado a exigir un Estatuto de Consumidores Electrointensivos en el que se implante la figura del “consumidor hiperelectrointensivo” para, además de mejorar las ayudas comentadas, aplicar “medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico... reducir los peajes de acceso, compensar el 7% del impuesto de producción e incluir el céntimo verde del carbón”. Es la fusión más descarada entre empresas y la burocracia sindical.

Ante el anuncio de cierre, el presidente del comité de empresa de CCOO, José Antonio Zan, ha declarado que “si el Gobierno tiene que intervenir la empresa unos meses o incluso unos años que lo haga”. Es decir, que asuma las pérdidas y las inversiones que Alcoa no ha realizado, para después regalarla (nuevamente) a una empresa privada.

La sección sindical de la CIG en San Cibrao ha exigido que “la fábrica vuelva al ámbito público garantizando una energía estable y competitiva”. También ha dicho: “vienen momentos muy duros de lucha en que... tenemos que defender el pan de nuestros hijos con uñas y dientes”. Esto es completamente cierto: por eso hay que plantear sin perder tiempo un plan de movilización contundente y ascendente que pase por:

- Llamar inmediatamente a los trabajadores a ocupar la factoría para garantizar que la producción continúe y se mantengan todos los puestos de trabajo: principal, auxiliares e indirectos.

- Convocar manifestaciones masivas en todas las localidades afectadas, llamando a participar a toda la población. Hay que preparar ya una huelga general en la comarca y ampliarla a toda Galicia.

- Organizar una gran huelga de toda la industria, haciendo confluir esta lucha con la de Nissan, y con la de todas las industrias cuyos empleos están amenazados. ¡Ningún cierre, ningún despido!

- Exigir al Gobierno la expropiación y nacionalización de Alcoa bajo control de los trabajadores, sin indemnización. Que se devuelva lo robado todos estos años a través de ayudas y subvenciones, y que ese dinero se utilice en la modernización de las instalaciones.

¡Hay que ocupar la empresa y exigir su nacionalización!

¡No al cierre de Alcoa!



Javi Losada
Esquerda Revolucionaria /
Comité de empresa por
CGT en Navantia Ferrol

Alcoa anunciaba el 28 de mayo el cierre de una de las dos plantas de San Cibrao (Lugo), lo que provocará el despido de sus 534 trabajadores y la destrucción de un total de 2.000 empleos contando los indirectos.

Aquí se produce aluminio primario, para ello son necesarias unas cubas en las que se realiza la electrólisis cuyo consumo de energía eléctrica representa la cuarta parte de todo el consumo del centro de San Cibrao. Por eso, desde hace años la multinacional viene presionando para que les reduzcan el precio de la electricidad.

Ahora para justificar el cierre argumenta pérdidas de 165 millones en los últimos tres años debido sobre todo a un precio de la electricidad superior al

de sus competidores. En los dos últimos años ya se les ha reducido desde los 57 a los 41 euros el MWh, pero no les basta y exigen que sea inferior a los 35 euros.

El gran negocio de parasitar al Estado

Esta multinacional americana, la tercera más importante del mundo, aterrizó en el Estado español en 1998 comprando por 383 millones de euros la empresa pública Industria Española del Aluminio (Inespal), que contaba con diez centros repartidos por todo el país. El Gobierno de Aznar, por entonces en plena vorágine privatizadora, anunció que esta venta incluía el compromiso de la multinacional de invertir 400 millones en la modernización de instalaciones y el mantenimiento de los 4.674 trabajadores que Inespal tenía por entonces.

La realidad 22 años después es que nunca se produjo tal inversión, las plantas fueron quedando obsoletas y reduciendo su actividad, se fueron vendiendo a fondos de capital y los trabajadores fueron despedidos. El último ejemplo fue la venta en julio de 2019 de los centros de Avilés y A Coruña a Parter Capital Group.

Este fondo suizo, experto en “rescatar a empresas”, se comprometió a transformar a estos centros en líderes en la producción de acero secundario para el sector de la automoción y la aviación, además de mantener todos los empleos como mínimo hasta julio de 2021. Apenas

un mes después empezó a negociar su venta al Grupo Industrial Riesgo, que se materializó en abril.

Las subvenciones y las ayudas del Estado a Alcoa fueron de tal magnitud que diez años después de comprar Inespal ya había recuperado los 383 millones que desembolsó.

Entre 1998 y 2011 los beneficios se acercaron a los 1.500 millones de euros. Pero hay más, de 2008 al 2018 Alcoa se ha ahorrado en la factura de la luz unos 1.000 millones mediante las subastas de interrumpibilidad, un mecanismo creado para que las grandes consumidoras reciban dinero por reducir su consumo en momentos determinados. Hoy paga 4 céntimos por kilovatio/hora, frente a los 9 de la industria o los 23 de las familias trabajadoras. Pero esto que ha sucedido con Alcoa solo es un ejemplo de cómo las grandes empresas vienen expoliando al Estado.

Tras el anuncio del cierre de Alcoa y de Nissan, Pablo Iglesias ha declarado que las nacionalizaciones “son perfectamente posibles”. Efectivamente, las nacionalizaciones no solo son posibles sino que son absolutamente necesarias y urgentes. Pero llevarlas adelante requiere basarse en la fuerza de la movilización de los trabajadores para enfrentar las presiones de las multinacionales, patronales y grandes poderes económicos. Hay que pasar de la retórica a la práctica.

Y estas nacionalizaciones no pueden ser para asumir pérdidas, sino parte de un

► www.izquierdarevolucionaria.net

El Gobierno da la espalda a la enseñanza pública y carga sobre el profesorado un final de curso inviable

Navantia-Ferrol, paralizada ante el incumplimiento del protocolo de seguridad

J. L.
CGT · Navantia-Ferrol

El 20 de mayo bloqueamos las puertas de entrada de la factoría. En realidad, el incumplimiento del protocolo de seguridad se viene produciendo desde que lo implantaron hace más de un mes. Cada día solo ha servido para aumentar la masificación, especialmente en las taquillas.

CGT ha defendido la necesidad de pasar a la acción, algo a lo que el comité se negaba sistemáticamente. Por eso, el 11 de mayo convocamos una asamblea de trabajadores donde proponer la paralización de la actividad. Inmediatamente después, junto a la CIG, denunciarnos a Navantia ante Inspección de Trabajo y Sanidad ya que está poniendo en riesgo nuestra salud.

Finalmente el comité decidió el paro. CGT ha participado activamente, pero también decimos que es absolutamente insuficiente. Además de garantizar la seguridad hay que exigir que los salarios de los trabajadores, desde el momento en que se suspendió la actividad (15 de marzo), deben ser pagados por las empresas íntegramente y anular los ERTE y los ERE que se vienen aplicando desde entonces.

► www.sindicalistasdeizquierda.net

Navantia Bahía de Cádiz incumple los protocolos de seguridad y salud laboral con los trabajadores

El Estado y la revolución

V. I. Lenin

Se cumplen 150 años del nacimiento de V. I. Lenin. Fundador del partido bolchevique y dirigente de la Revolución de Octubre, sus aportaciones políticas supusieron un desarrollo notable del socialismo científico y de la práctica revolucionaria.

Lenin rechazó incansablemente la política de colaboración de clases y desafió a todos los abogados de la unidad nacional. Proclamó la completa independencia del partido revolucionario, manifestando una hostilidad militante hacia la participación en los gobiernos capitalistas. Siempre presentaba el bolchevismo como el partido del proletariado combatiente y de la oposición más intransigente.

De sus grandes textos, *El Estado y la revolución* constituye una completa refutación de aquellos socialistas que, abandonando un punto de vista de clase, piensan que el Estado es una herramienta para combatir el capitalismo y lograr reformas sociales progresivas.

Un clásico marxista de rabiosa actualidad

Escrito por Lenin en la clandestinidad, entre agosto y septiembre de 1917 cuando se ocultó de las persecuciones del Gobierno Provisional tras las Jornadas de Julio, perseguía un fin teórico y práctico con esta obra: desenmascarar la política socialpatriota de los dirigentes de la Segunda Internacional, expurgando la teoría marxista del Estado del compendio de tergiversaciones reformistas que se extendieron a lo largo de años.

Su impacto en las filas del movimiento obrero internacional —tanto de inspiración marxista como anarquista— fue tremendo. Trotsky lo reseñó así: “En ese momento Lenin dirigió todo el fuego de su crítica teórica contra la teoría de la democracia pura. Sus innovaciones fueron las de un restaurador. Limpió

la doctrina de Marx y Engels —el Estado como instrumento de la opresión de clases— de todas las amalgamas y falsificaciones, devolviéndola su intransigente pureza teórica. Al mito de la democracia pura contrapuso la realidad de la democracia burguesa, edificada sobre los cimientos de la propiedad privada y transformada por el desarrollo del proceso en instrumento del imperialismo. Según Lenin, la estructura de clase del Estado, determinada por la estructura de clase de la sociedad, excluía la posibilidad de que el proletariado conquistara el poder dentro de los marcos de la democracia y empleando sus métodos. No se puede derrotar a un adversario armado hasta los dientes con los métodos impuestos por el propio adversario si, por añadidura, es también el árbitro supremo de la lucha” (León Trotsky, *El con-*

greso de liquidación de la Comintern, 21 de agosto de 1935).

Lenin se encargó de poner las cosas en su sitio: “La sociedad capitalista considerada en sus condiciones de desarrollo más favorable, nos ofrece una democracia más o menos completa en la república democrática. Pero esta democracia se halla siempre comprimida dentro del estrecho marco de la explotación capitalista y, por esta razón, es siempre, en esencia, una democracia para la minoría, solo para las clases poseedoras, solo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo siempre, poco más o menos, lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: libertad para los esclavistas. En virtud de las condiciones de la explotación capitalista, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la penuria y la miseria, que ‘no están para democracias’, ‘no están para política’, y en el curso corriente y pacífico de los acontecimientos, la mayoría de la población queda al margen de toda participación en la vida político-social” (Lenin, *El Estado y la revolución*, Fundación Federico Engels, Madrid 1997, p. 87).

Cuando el Estado vuelve a ser utilizado como el medio para rescatar las grandes corporaciones mientras se sacrifica la vida de millones, y los dirigentes de la nueva izquierda socialdemócrata resucitan su amor hacia Roosevelt, la ONU, el Papa Francisco y la Constitución del 78, leer la obra de Lenin es sentir un soplo de aire fresco, es reconciliarse con la honestidad del genuino pensamiento de la izquierda transformadora. Su llamada a la rebelión conserva toda la fuerza de la necesidad histórica y nos convoca a todas y todos.



¡Hazte colaborador de la Fundación Federico Engels!

¡Apoya las ideas del marxismo!

Por 30 euros al año podrás obtener todos los libros de nuestro catálogo a un 30% menos

Durante años toda la maquinaria de propaganda ideológica de la burguesía se ha puesto al servicio de una feroz campaña contra las ideas del marxismo y del socialismo. Apoyándose en el colapso de la URSS y del estalinismo, los defensores del capital entonan una supuesta marcha triunfal, con su modelo de libre empresa, recortes y privatizaciones. Todos los crímenes del capitalismo fueron ocultados tras las bambalinas, y no pocos intelectuales, entre los que destacaban algunos con credenciales izquierdistas en su juventud, contribuyeron entusiastamente a este nuevo pensamiento único. Incluso los líderes de la llamada “nueva izquierda” no dudaron en enterrar por enésima vez al marxismo.

Pero el sueño utópico de un capitalismo de rostro humano se ha convertido en una cruel pesadilla. Cuando una dura ofensiva sobre el empleo, los salarios y los derechos democráticos alienta una salida a la crisis en beneficio del capital financiero y de más au-

toritarismo, necesitamos levantar una alternativa socialista consecuente. Dar a conocer las ideas del marxismo revolucionario a una nueva generación de jóvenes y trabajadores es urgente.

Ahora es el momento de apoyar y reforzar la Fundación Federico Engels. Por eso te llamamos a que te hagas colaborador de la Fundación mediante una aportación de 30 euros anuales. Con este apoyo contribuirás mucho a nuestra labor editorial y además podrás disfrutar de una reducción del 30% en todos los libros de nuestro catálogo durante el año (con la renovación anual de esta aportación disfrutarás de la reducción del 30% siempre).

Colaborando con la Fundación Federico Engels no haces caridad ni filantropía, inviertes en la mejor de las empresas posibles: la lucha por el socialismo, contribuyendo al rearme ideológico de la izquierda.



▶ Hazte colaborador entrando en www.fundacionfedericoengels.net

Levantamiento social contra la violencia policial racista

¡La lucha de clases es el camino para derribar a Trump!



Izquierda Revolucionaria
Internacional

El 25 de mayo, un trabajador negro de 46 años, George Floyd, fue asesinado cruelmente a manos de un policía en Minneapolis. En el vídeo de su arresto se puede ver como el agente presiona con la rodilla el cuello del trabajador afroamericano mientras lo inmoviliza en el suelo cerca de nueve minutos, a pesar de que este suplicaba que no podía respirar. Tres policías más contemplaban impasibles el crimen.

Floyd murió horas más tarde en el hospital y su asesinato se ha convertido en la gota que colma el vaso: un levantamiento social, con elementos típicos de una insurrección, ha prendido en más de 25 grandes ciudades del país poniendo al Gobierno de Trump contra las cuerdas.

El movimiento se extiende por todo EEUU

Bajo las consignas de “No justice, no peace” o “Black Lives Matter”, miles de personas tomaron las calles pacíficamente y marcharon hacia el Departamento de Policía exigiendo justicia. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma, pero la brutal represión, que se extendió en los días siguientes, no amedrentó a los manifestantes que se defendieron legítimamente.

Trump ordenó el despliegue de 550 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En el segundo día de choques un manifestante murió asesinado

de un disparo policial. La valentía y determinación de las decenas de miles de jóvenes negros, blancos, asiáticos, de trabajadores y personas mayores se hizo visible gracias a cientos de vídeos en las redes sociales. También la brutalidad policial, que a pesar de ser empleada a discreción no evitó que una de las comisarias de la ciudad fuera incendiada, y que los efectivos policiales huyeran ante el avance de la población.

Como era de esperar, la clase dominante y los medios de comunicación a su servicio han iniciado una campaña de criminalización, excusando a los asesinos de Floyd y a quienes les protegen desde la Casa Blanca. Todo esto después de que la policía de 17 ciudades realizara más de 1.400 detenciones.

Lucha de clases en estado puro

Donald Trump no ha vacilado en echar gasolina al fuego, llamando a comenzar los tiroteos lo antes posible y proponiendo la inmediata ilegalización de las organizaciones de izquierda y antifascistas que han participado activamente en las protestas.

Y es precisamente esta actitud provocadora lo que ha hecho extenderse al movimiento. El látigo de la contrarrevolución ha espolado la revolución. En menos

de cuatro días, treinta ciudades, como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Atlanta, Dallas, Washington... se han llenado de decenas de miles de personas denunciando la brutalidad policial y cargando contra Trump y su Gobierno. La rabia se ha propagado como la pólvora.

Ni el toque de queda en más de una decena de estas ciudades, gobernadas tanto por republicanos como por demócratas, ni el despliegue creciente de la Guardia Nacional —solo en Minnesota, 13.000 efectivos, el mayor despliegue de los últimos 160 años— han conseguido sofocar este impresionante levantamiento racial.

La solidaridad despertada provoca sudores fríos a los capitalistas americanos. Los conductores de autobuses que se están negando a que la policía transporte a los detenidos en sus buses. Así lo expresaba uno de ellos: “Como trabajador de tránsito y miembro del sindicato [ATU Local 1005], me niego a transportar a mi clase y a la juventud radicalizada a la cárcel. [...] La protesta está completamente justificada y debe continuar hasta que se cumplan sus demandas”.

El apoyo a las reivindicaciones y el grito que se ha colocado en el epicentro de la lucha, “I can’t breathe” (No puedo respirar), se ha escuchado también en ciudades como Londres, París o Berlín, donde el 31 de mayo se han celebrado marchas y concentraciones masivas contra el racismo y la brutalidad policial. El movimiento está adoptando una dimensión internacional inspiradora.

PASA A LA PÁGINA 2 ▶

